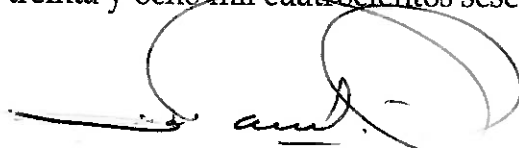


Recibí  
Ma. del Carmen T.  
Sep. 22/2021 9:44am.

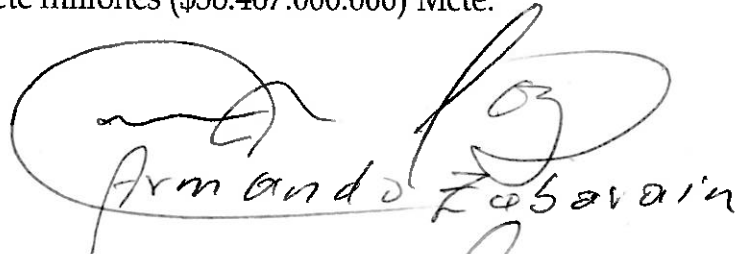
1306

**ADICIÓNENSE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE 2021 CÁMARA. "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022".**

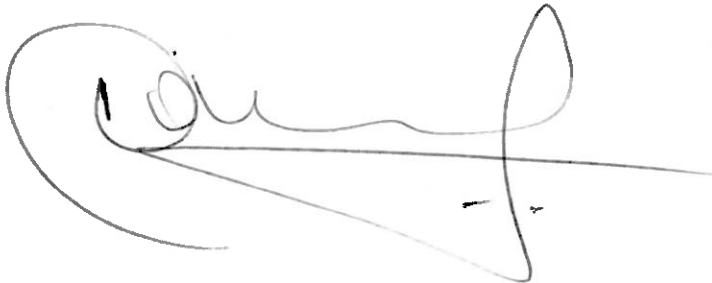
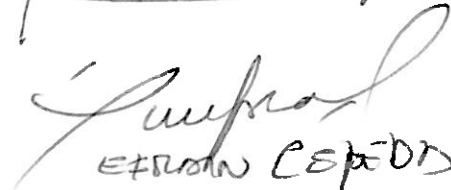
**Artículo nuevo.** Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 267 de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" adiciónense a proyecto 210101-2103-1900-7 "Distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo para abastecer al departamento de Nariño", la suma de treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete millones (\$38.467.000.000) Mcte.



MYRIAM PAREDES AGUIRRE  
Senadora de la República



Liliana Benavides.





## JUSTIFICACIÓN

La Constitución Política de Colombia, en el marco del Estado Social de Derecho, consagra en el artículo 334 *“la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario”*. (Subrayado fuera del texto).

La Ley 2135 de 2021, establece en su artículo 6 parágrafo 4 *“El Ministerio de Minas y Energía dará continuidad a la aplicación del artículo 55 de la Ley 191 de 1995, modificado por el artículo 9 de la Ley 1118 de 2006 y el artículo 267 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la compensación del transporte terrestre de combustibles y de GLP, que se realice hacia el departamento de Nariño”*.

Por si fuera poco, la Ley 1955 de 2019, establece en su *“artículo 267°. RECONOCIMIENTO COSTOS DE TRANSPORTE. Durante la vigencia de la presente Ley, la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 191 de 1995, podrá reconocer el costo del transporte terrestre de los combustibles líquidos derivados del petróleo que se suministre desde las plantas de abastecimiento ubicados en el departamento de Nariño hasta la capital de dicho departamento y sus demás municipios”*.

En el mismo sentido, el Decreto 1056 de 1953 *“Por el cual se expide el Código de Petróleos”* establece en el artículo 212 *“Como el Transporte y la distribución del petróleo y sus derivados constituyen un servicio público, las personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los reglamentos que dicte el gobierno en guarda de los intereses generales”*. (Subrayado fuera del texto).

La Ley 681 de 2001 *“Por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles”*, modificada por la Ley 1430 de 2010 *“Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”* estableció en su artículo 9 *“En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles líquidos, los cuales estarán exentos del impuesto global, IVA y arancel”*.

El Decreto 1073 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”*, en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.7 mantiene en cabeza del Ministerio de Minas y Energía la función de distribución de combustibles

líquidos derivados del petróleo en los municipios de zonas de frontera, la cual podrá ser ejercida directamente o mediante cesión o contrato con distribuidores mayoristas, en el artículo 2.2.1.1.2.2.6.8. Establece que, el Ministerio de Minas y Energía Dirección de Hidrocarburos elaborará y aprobará un plan de abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo para cada uno de los departamentos que cuenten con municipios definidos como Zona de Frontera, para lo cual podrá consultar a los distribuidores mayoristas, minoristas y/o terceros interesados, sin que ello implique que tales conceptos sean de obligatorio recibo y el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1 definió al departamento de Nariño y sus municipios como parte de los territorios denominados Zona de frontera.

La Sentencia C-661-98 de 12 de noviembre de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Barrera Carbonell, sostiene la exequibilidad del artículo 55 de la Ley 191 de 1995 en los siguientes términos:

*"La Corte entiende que la autorización prevista en el artículo 55 de la ley 191 de 1995 constituye, sin lugar a dudas, uno de los eventos en que se puede admitir, excepcionalmente, que los organismos públicos puedan otorgar auxilios o subsidios a personas privadas, sin que por ello se incurra en la prohibición constitucional prevista en el artículo 355 superior. Cuando el artículo 337 autoriza al legislador para expedir regulaciones especiales en materia económica y social, destinadas a promover el desarrollo económico y social de las zonas de frontera, está señalando una finalidad constitucional que el legislador puede satisfacer, mediante la adopción de las medidas que contribuyen a realizarla. Es incuestionable, por lo tanto, que el subsidio temporal al transporte de combustibles a cargo de Ecopetrol es una concreción práctica y admisible del referido mandato constitucional" (...). "En efecto, si no se subsidiara el transporte de combustible en las zonas de frontera, su costo resultaría excesivamente gravoso para los usuarios del transporte, con la natural incidencia en otros sectores de la actividad económica, con perjuicio general para el desarrollo social y económico que el legislador debe promover en las zonas de frontera."*

En los términos del artículo 334 de la Carta Política, constituye una forma legítima de intervención del Estado en la economía y corresponde a una técnica de dirección y manejo de los agentes y variables que en ella inciden, que por su eficacia resulta imprescindible en las actuales condiciones. En la actualidad, se reconoce para el Departamento de Nariño el amparo de la ley de fronteras referente a la compensación de los combustibles, sin perjuicio de lo cual, la realidad operacional y logística a través de la cual el Estado, por conducto del Ministerio de Minas y Energía persigue cumplir con la función de distribución de combustibles ha variado, en la medida en que, a través de los principios de colaboración y coordinación, se desarrollan al amparo de planes de desarrollo existentes, plantas de abastecimiento que operan desde el interior del Departamento, lo cual precisamente fue la finalidad tanto de la Ley 681 en el año 2001 como en la Ley 1430 de 2010.

Actualmente Nariño tiene un cupo de 10,2 millones de galones mensuales en las 5 zonas en que se encuentra dividido el departamento. La tarifa en 4 zonas es de \$426,4 pesos por galón y en la zona número 5 es de \$406,7 pesos por galón, lo que da como resultado \$46.433 millones de pesos.

Además, para el 2021 existe un déficit de \$7.000 millones de pesos y si se suma la necesidad del GLP cuyo volumen mensual es de 2 millones de galones, a una tarifa de \$426,4 pesos por galón, genera una necesidad de \$10.234 millones.

Por lo anterior, la necesidad total para garantizar la distribución de recursos para el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo para abastecer al departamento de Nariño es de \$64.867 millones y en el actual valor presupuestado para el 2022 es de \$26.400 millones, lo que genera un déficit de \$38.467 millones de pesos.

## REFERENCIAS

- Constitución política colombiana (1991). Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, Colombia, 6 de Julio de 1991.
- Ley 2135 de 2021. Bogotá, Colombia
- Ley 1955 de 2029. Diario Oficial No. 50.964, Bogotá, Colombia.
- Ley 1430 de 2010. Diario Oficial No. 47.937, Bogotá, Colombia.
- Ley 681 de 2001. Diario Oficial No. 44.515, Bogotá, Colombia.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-661 de 1998. MP Antonio Barrera Carbonell.
- Decreto 1056 de 1953. Diario Oficial de la República de Colombia No. 28.199, Bogotá, Colombia.
- Decreto 1073 DE 2015. Diario Oficial de la República de Colombia No. 49.523, Bogotá, Colombia.